



— Universidad —  
**Inca Garcilaso de la Vega**  
**Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas**

***FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS***

**TRABAJO SUFICIENCIA PROFESIONAL**

**EL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN ANALISIS DEL R.N. N° 2742-2017**

**AUTOR**

**SAMUEL MAURICIO VALDERRAMA**

**ASESOR**

**DR. FERNANDO MARCA FERNANDEZ**

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE**

**ABOGADO**

**LIMA – PERÚ**

**2019**

#### **DEDICATORIA:**

Dedico de manera especial a mi padre y a mi madre que en paz descanse por su apoyo incondicional y porque sentaron en mí las bases de superación profesional.

A mis hermanos porque me empujaron a concluir mis estudios universitarios, deseosos de que obtenga una nueva profesión de calidad y de servicio a la sociedad

Y finalmente dedico humildemente a los catedráticos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por impartir su valiosa enseñanza con mucho amor y perseverancia que inculcaron en mí el deseo de no desmayar y por el contrario seguir hasta concluir esta carrera profesional.

.

## **AGRADECIMIENTO:**

A Dios por darme la vida principalmente y darme esta oportunidad de desarrollarme en una nueva profesión de manera satisfactoria.

Gracias Dios mío por estar siempre a mi lado y darme tu amor a pesar de no ser digno de recibir tu misericordiosa bondad, pero humildemente hoy y siempre me postrare ante ti para darte infinitamente las gracias.

.

## INDICE

DEDICATORIA:.....	2
AGRADECIMIENTO:.....	3
RESUMEN .....	5
INTRODUCCIÓN .....	6
CAPÍTULO I .....	7
MARCO TEÓRICO.....	7
1.1.Antecedentes legislativos .....	7
1.2. Marco Legal .....	10
1.3. Análisis doctrinario de figuras jurídicas presente en el expediente y afines nacionales y/o extranjeras .....	10
CAPÍTULO II .....	25
CASO PRÁCTICO.....	25
2.1.Planteamiento del Caso .....	25
2.2.Síntesis del caso.....	27
2.3.Análisis y opinión crítico del caso .....	32
CAPITULO III .....	34
ANALISIS JURISPRUDENCIAL.....	34
3.1 Jurisprudencia nacional.....	34
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CASO .....	39
Conclusiones .....	39
Recomendaciones del caso.....	40
REFERENCIAS.....	41
Referencias Legales .....	42
ANEXOS .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## **RESUMEN**

Para fines de esta presente investigación, se consideró analizar el EXP: N 56-2014, a fin de analizar la correcta valoración o calificación de la declaración del agraviado en el delito de Robo Agravado; esto es si su declaración de éste sería prueba suficiente para considerar al imputado culpable.

Para ello es necesario referirnos al acuerdo plenario 02- 2005 CJ/-116, que establece los criterios o requisitos que se deben considerar en la declaración del agraviado, sindicación, y testigo.

Nuestra legislación reconoce derechos fundamentales, como la presunción de inocencia que en generalidades es reconocer al procesado por la comisión de un delito, la calidad de inocencia hasta que la autoridad acusadora puede corroborar su culpabilidad.

Pero existe vacíos legales, como es el caso del delito contra el patrimonio, como el robo agravado, que si bien es cierto, existe normas generales, no hay una norma en específico.

Lo que se pretende con la presente investigación es que exista una debida formulación de la acusación en contra del imputado, que se base en declaraciones que cumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo plenario.

**Palabras Claves:** Robo agravado, declaración, imputado, agraviado.

## **INTRODUCCIÓN**

Entre los delitos más comunes que se vienen cometiendo en la actualidad, es el robo, que para considerarse que tiene agravantes este debe cumplirse con lo establecido en la norma jurídica, esto es, que de no cumplirse no se podría hablar de una infracción penal.

Pero como saber si la declaración del agraviado, es suficiente como para acusar al imputado, es ahí que existe un vacío legal que si bien es cierto en el Acuerdo Plenario dos-dos mil cinco/ CJ116 del 30 de septiembre del 2005, se establecieron ciertos requisitos.

Pero que muchas veces, por ser una norma de carácter general no se toma en cuenta, ocasionando con ello, que se vulnere un derecho fundamental como es el derecho a la presunción de inocencia.

En el presente trabajo se abordará más profundidad en el delito de robo, sus agravantes, en relación con el análisis de un caso.

## **CAPÍTULO I**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **1.1. Antecedentes Legislativos**

Sobre el derecho a la presunción de inocencia podríamos decir que a través del tiempo se ha colocado impositivamente como un derecho fundamental que ha venido construyendo sus cimientos sobre ramas del Derecho sancionador como por ejemplo el Derecho Administrativo Sancionador o el Derecho Penal. El principio de presunción de inocencia se ha creado para asegurar que todo aquel autor de un hecho delictivo sea castigado no obstante, que ningún presunto inocente sea castigado por un acto delictivo que no cometió (Higa, s.f., p. 114).

El principio de presunción de inocencia puede reconocerse como la cualidad que se le da a todo procesado de señalarlo como inocente hasta que se pueda comprobar judicialmente su responsabilidad legal, este principio también forma parte fundamental dentro del derecho procesal penal en el sistema acusatorio, realizando la función de garantía sobre la libertad de los ciudadanos, dentro de un proceso penal favoreciendo así al acusado de la comisión de un delito, presumiendo su inocencia durante las etapas del proceso ya sea en el desarrollo de la investigación como en el juzgamiento, hasta la existencia de una sentencia firme que lo condene, es por eso que en el sistema procesal que se desarrolla en el país, la responsabilidad y la carga de la prueba le corresponde al representante del ministerio público, es decir que por la forma del sistema no es función del procesado presentar medios probatorios que acrediten su inocencia, sino por lo contrario, la carga probatoria le pertenece al estado, es él quien a través del ministerio público quien debe presentar pruebas que corroboren la responsabilidad o culpabilidad del procesado (Cafferata, 2004, p.169)

Podría optarse por señalar dos interpretaciones al principio de presunción de inocencia, una ya antes mencionada justificada en que el procesado no está en la obligación de demostrar su inocencia a través de la presentación de medios de prueba y la otra interpretación que se manifiesta es que este principio cumple con

restringir la aplicación de algunos mecanismos y medidas que atentan contra la libertad del procesado antes de que se haya establecido su culpabilidad, pero existen excepciones en las que resulta inaplicable el principio de presunción de inocencia, concorde a lo establecido en la legislación, así como se llama de la función que cumple como principio según las fuentes fundamentales del derecho y sus ramas también tiene un sentido como derecho fundamental y garantía individual, dichas formas adaptables no solo están reconocidas <sup>23</sup>por la legislación nacional sino también por tratados, declaraciones, pactos internacionales suscritos entre las naciones, entre los cuales el más resaltante resulta ser el pacto de San José de Costa Rica (Gomes, 1995, p.13).

Señalado desde otro punto de vista se manifiesta como presunción de inocencia una norma o principio que va de la mano con la carga de la prueba que tiene el misterio público en su rol de autoridad acusatoria, en tanto que si no se encuentran o presentan pruebas ante el juzgador que puedan dar fe o acreditar la responsabilidad del procesado sobre los hechos imputados, se deberá declarar a este absuelto e inocente (Nieva, 2018, p.12).

En relación a este principio pueden surgir diversos puntos motivos de duda o incertidumbre sobre la aplicación del mismo, tanto para los investigadores como para los juristas y todos aquellos que se vean relacionados por lo cual se menciona que:

A criterio del juez se deben despejar todas las dudas en torno a la culpabilidad del imputado, si bien es cierto que como seres humanos y por el mismo hecho de no haber estado presentes o haber sido testigos oculares de los hechos y la realidad de la actividad delictiva, no podría el juez saber al cien por ciento la verdad de los hechos, pero por otro lado debe tener en cuenta las facultades que la ley le otorga para evaluar y apreciar los medios probatorios, de tal manera que pueda generar certeza y este a su vez pueda fundamentar su decisión con razonabilidad, teniendo presente que si aquellas pruebas no son del todo certeras o en vez de empezar a despejar incertidumbres, obstruyen o resultan irrelevantes por ende no guardan relación acreditable de las ideas principales de acusación, el juez debe



seguir respetando la calidad de inocencia del imputado al no haberse podido probar su culpabilidad (Nieva, 2018, p.12).

Habla también de la incidencia de la carga de la prueba en el Derecho Procesal Penal, señalando que por carga se sobre entiende la obligación o facultad que tiene una persona para poder atribuirle medios probatorios a un hecho que se afirma a fin de poder demostrar o comprobar su calidad de certeza, de tal manera es así mismo un requisito dentro del proceso establecer la forma y tiempo de presentar los medios<sup>1</sup> probatorios, cumpliendo con las garantías procesales correspondientes, dichas pruebas presentadas sirve de gran ayuda para dilucidar las incertidumbres de la controversia, y es así como el juez al dejar de lado las dudas puede dictaminar fallos más justos fundamentándose en las pruebas adecuadas que el desee considerar dentro del proceso (Nieva, 2018, p.12).

Dentro del proceso penal es en tanto la fiscalía o ministerio público el encargado de probar la culpabilidad del procesado, para cumplir con este objetivo a través de la investigación preparatoria se realizan diligencias que recolectan datos relevantes que son utilizados como medios de prueba, no obligando así al procesado a probar su inocencia o desligarse de la responsabilidad que se le atribuye en la comisión de un delito, para lo cual uno de los primeros principios fundamentales en el que el ministerio público se basa es el principio de legalidad, que se aplica siendo así durante todo el proceso manteniendo a este dentro de los límites y restricciones que la ley establece haciendo de tal forma posible la puesta en práctica de lo que está establecido expresamente en la misma (Nieva, 2018, p.13)

Una vez iniciado el proceso penal no es de estricto u obligación que el procesado rinda una declaración, ya que se le respeta primordialmente su derecho a guardar silencio desde su detención, con esto señalamos que está en poder del procesado decidir si es que realiza alguna declaración incluso en la audiencia de sentencia, el silencio de parte del procesado no manifiesta culpabilidad alguna del mismo, muy distinto de una declaración presentado por el imputado donde se declare culpable o inocente eso si representaría un indicio para hallar la verdad jurídica en el proceso (Nieva, 2018, p.12)

La relación que guarda el principio de presunción de inocencia con la carga de la prueba es que se debe considerar desde el inicio del proceso al imputado como inocente, con el pasar de las etapas procesales y llegando así a la fase probatoria, se deberán presentar diversos medios probatorios los cuales deben cumplir requisitos establecidos por ley para así no vulnerar ningún tipo de derecho procesal del encausado (Nieva, 2018, p.13).

## **1.2. Marco Legal**

Acuerdo plenario dos-dos mil cinco/ CJ116 del 30 de septiembre del 2005

Exp: N 56-2014

Nº 2915- 2004-PHC/TC

ART 189º del Código Penal

## **1.3. Análisis doctrinario de figuras jurídicas presente en el expediente y afines nacionales y/o extranjeras**

### **1.3.1. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO**

Este principio puede tomarse como una derivación de un principio fuente importante como es el principio de presunción de inocencia reconocido constitucionalmente, desarrollando en esencia que es derecho de toda persona dentro de la jurisdicción correspondiente que sea procesado por la comisión de un delito a no ser condenado cuando no se acredite de forma material a través de los medios probatorios presentados por la autoridad determinada su responsabilidad o culpabilidad esta regla se encuentra enmarcada en los textos de procedimientos penales (Vásquez, 2000, p. 276).

De la misma manera también se señala que dicho principio cumple un rol primordial no solo en el derecho penal sino que también dentro del derecho procesal penal, justificando esta afirmación en que con la finalidad de interpretar y darle sentido a la aplicación del derecho penal en esencia, se aplican criterios que

sirven de normas para que la aplicación sea más certera y justa, si bien es cierto en el derecho penal se habla del rigor y la benevolencia al momento de aplicar el castigo al infractor, para el ámbito procesal se determina que la función de este principio va más dirigida a la probanza y el ofrecimiento de pruebas, en vista de que si aquellas pruebas que se presentan no generan la certeza y verosimilitud que es requisito para condenar a una persona como autor de un delito generando de tal manera un sentimiento de duda en el juzgador dicha duda quedara a favor del imputado, esto quiere decir que si el juez no está convencido en su totalidad de la culpabilidad del procesado y lo da a conocer a través de los fundamentos de la sentencia, no puede dar un fallo condenatorio ya que en consecuencia afectaría directamente el principio fuente que es el de presunción de inocencia estos dos principios pertenecen uno al derecho penal y el otro al derecho procesal penal pero se complementan inequívocamente en el desarrollo del proceso con el fin de dar un fallo certero y justo (Gutiérrez, 1974, p. 475).

En otro sentido como señalan algunos juristas el principio *in dubio pro reo* o traducido al español la duda favorece al reo es de aplicación directa dentro de la etapa probatoria de un proceso penal, esto quiere decir que solo tiene importante injerencia en el derecho procesal penal, contribuyendo de tal manera a despejar las dudas existenciales al momento de poner en práctica el derecho, en circunstancias donde las pruebas sean la ayuda para resolver las controversias. En cuanto al proceso en sí, cuando este finaliza y el juzgador emite su fallo final y este resulta condenatorio, la determinación del mismo se deduce de la presencia de certeza de parte del juzgador frente a la controversia presentada, así como la evaluación de medios probatorios de los cuales se habla podrían tener un carácter negativo o positivo sobre la decisión tomada al concluir el proceso penal y que influyen directamente en la determinación de la culpabilidad del procesado, y de encontrarlo culpable del hecho atribuido, también influyen los medios probatorios en la comprobación de agravantes o atenuantes de la pena que se le impondrá al imputado, esta circunstancia concurre cuando todos los medios probatorios presentados decretan de manera indubitable la responsabilidad penal del imputado respecto de su accionar frente a una situación, por otro lado se contrapone el supuesto donde las pruebas y recurso admisibles dentro de un

proceso penal y todos los elementos reunidos disponibles que se presentaron ante el juez, habiendo extenuado dichos recursos que van dirigidos a dilucidar y aclarar los presupuestos al juez acentuando su certeza sobre la verdad jurídica y concluyendo que no hay suficientes indicios, que no se genera por lo tanto verosimilitud en el criterio del juez que lleva a cabo el proceso, es entonces que se aplica este principio, ya que no se le puede atribuir cargos o delitos al imputado mientras la autoridad encargada no haya sustentado correcta o suficientemente la acusación, no se puede realizar dicha imputación contra en vista de que no se ha llegado a una comprobación absoluta o certera de los hechos jurídicamente probables, de tal manera se puede determinar la absolución del procesado por las razones antes expuestas, es de esta forma que se configura la aplicación de este principio para las circunstancias determinadas las cuales incurren cuando existen dudas razonables de parte del juez sobre la culpabilidad de una persona imputada por la comisión de un delito o sobre la existencia de hechos relevantes que tengan relación con lo jurídico, teniendo en cuenta que la sentencia en esos casos debe favorecer al procesado (Herrera, s.f., p.14).

### 1.3.2. VALORACION DE LA PRUEBA

Podríamos definir de alguna manera a la actividad probatoria como aquel impulso y ahínco de los sujetos procesales que pueden llegar a presentar relación con la producción, la notificación y valoración de todo elemento probatorio. La actividad probatoria está en la completa obligación de enfocarse tan solo en la agrupación de aquellos elementos que se basan solamente en hechos dejando de lado toda teoría o hecho fantasioso como también toda acción ya probada que hacen que se configure el delito y que son de total importancia para dictaminar una condena por tan solo un delito mas no por uno distinto, aunque se hallen similitudes en rasgos conductuales que resguardan tanto al bien jurídico como la integridad de la persona (San Martin, 2003, p. 814).

Por estos motivos es que la Actividad Probatoria:

- Debería ser alcanzable también para destacados elementos con previa certificación de veracidad donde se depositan las circunstancias que agravan al delito, se deberán ampliar los medios probatorios en caso de que se tenga la certeza de que esa ampliación contendrá elementos que sean determinantes para hallar la culpabilidad, Se encuentra obligado a realizar la acusación como también la acción de inculpar (Miranda, 1997, pp. 177-18).

Encontramos, en base a la revisión de la valoración probatoria, que:

- Por obligación judicial, se debe motivar detalladamente cual ha sido el método empleado para desarrollar, en la audiencia, la valoración de los medios probatorios y por nada del mundo se puede vulnerar el derecho a que el acusado sea considerado como inocente a menos que se demuestre lo contrario (principio de inocencia) porque no existe un marco probatorio específico que abarque todos los hechos punibles (Sentencia, N° 976, 20012).

- Se debe emitir un cambio en los caracteres de la resolución emitida por el juez de la entidad que haya caído en un error indiscutible dentro de la motivación de la actuación de medios probatorios. Por estos motivos se prefiere tan solo comprobar la resolución motivada de aquel juez, que es su turno, valora y motiva cada punto resuelto eficacia de la resolución judicial, siempre y cuando se encuentre dentro dicha motivación de la resolución haya sido elaborada por el ente regulador jurisdiccional competente de manera arbitraria irracional o absurda, en otras palabras, la valoración de la prueba ha sido elaborada mediante el uso de la razón y bases no sustentables que fácilmente se les podría catalogar como ilógico e incoherente sustentado por argumentos netamente de carácter arbitrario, así como todo aquel que aplica discernimientos discrepantes contra los mandatos emanados por los entes constitucionales (Sentencia, N° 976, 20012).

Lo que se requiere para desvirtuar la presunción de inocencia

Basándose en la presuposición *iuris tantum*, compromete a todo ciudadano a considerar a cualquier procesado como inocente del caso que se le impute hasta que se logre comprobar lo contrario. Se pone en práctica desde que se presente la situación que se le acuse a una persona de haber sido el autor de un delito,

dejando a la persona acusada en calidad de sujeto sospechoso en lo que dura todo el debido proceso, hasta que la misma finalice definitivamente mediante la expedición de una sentencia. Así mismo, el argumento 12 del expediente N° 2915- 2004-PHC/TC emanada por Tribunal Constitucional determino que “el principio de inocencia no pierde vigencia durante todo el proceso con la condición de que no se emita una resolución judicial que, como consecuencia del debido camino que se llevó a cabo para la investigación con aquellas garantías constitucionales características del debido, sin que la pueda desnaturalizar”. Es imposible no aprenderse que dentro del debido proceso penal hallamos la adhesión de la carga de la prueba entre demandante y demandado y esta se puede interpretar de dos formas (Vizcarra, 2016, p. 329).

- Subjetivo o formal: Se le conoce como reglamento de disposición distributiva de la carga de la prueba que se da entre las partes, vale decir, esclarece la persona encargada de recopilar y verificar que la evidencia o prueba sea admitida (Vizcarra, 2016, p. 329).

- Objetivo o material: Podemos entender a la carga de la prueba dentro del debido proceso penal como la situación en donde el juez frente a una posición de falta o insuficiencia de los medios probatorios, se deberá manifestar de manera determinante para llegar al meollo del hecho delictuoso, para luego elevar estos medios probatorios ya admitidos, actuados y valorados, teniendo como cimiento a las reglas de la lógica, su base empírica y las reglas de la ciencia. Si se desea desarticular el principio de presunción de inocencia, se debe precisar que se debe realizar cualquier tipo de accionar pruebe los cargos que se le atribuyen al acusado ya que es la labor de la acusación a quien le corresponde y en caso no se hallen los medios suficientes, retribuirle los cargos (Vizcarra, 2016, p. 329).

Como bien es de saber para que se corrobore la actividad delictiva y la configuración de un delito se toman en cuenta 3 instancias: la primera se da durante las diligencias de investigación donde se realiza conforme a ley la recolección de medios probatorios que ayuden a esclarecer la controversia pasando posteriormente a una segunda fase después de halladas las pruebas o elementos relacionados con el delito el juez determina la valoración de lo ofrecido

por el representante del ministerio público, quedándose solo con aquellos medios probatorios que tenga relevancia, el juzgador en esta fase se encarga de analizar si las pruebas presentadas le generan convicción por ultimo después de la evaluación que realiza el juez, la tercera fase es la decisión justificada, en la cual al seleccionar cuales son los medios probatorios relevantes para resolver la controversia da un fallo razonado, de acuerdo a su convicción y la certeza que las pruebas le generan excluyendo del todo aquellas que no son esenciales para la determinación del fallo.

Uno de los términos principales a tratar en este trabajo de investigación es la valoración que se le da a las pruebas presentadas, este aspecto es tan importante que es recogido por el código procesal penal vigente el que señala que como el sistema que se maneja en el Perú determina la libre convicción del juzgador bajo su criterio.

Este sistema de la libre convicción en cuanto a la valoración de la prueba es dirigida por varios juristas recogida en diferentes cuerpos jurídicos y analizada a fondo reluciendo que se trata de una facultad que se le otorga al juzgador para de tal manera este se pueda guiar de 3 aspectos importantes que son la lógica, la ciencia y la experiencia evaluando de la misma forma si los medios de prueba presentados ante él le generan o no ese convencimiento necesario para inculpar o exculpar al procesado de esta manera aprecia las pruebas y por otro lado también es obligación del juzgador que argumente de tal forma la decisión final que coloque en la sentencia la cual debe ser razonada justa y clara dirigida y direccionada solo por lo que la ley le establece en el campo de acción que le otorga referido a la valoración de la prueba.

### 3.1.6. CLASES

#### 3.1.6.1. ROBO CON LESIONES

La Doctrina indica que la violencia que se usa para cometer el delito, genera las lesiones que podría presentar el sujeto pasivo de la acción. De igual manera es muy importante saber los motivos que tuvo el sujeto activo que lo llevo realizar el delito para de esta manera rescatar el mayor o menor grado de culpabilidad lo cual se usará para determinar la pena exacta aplicable a la culpabilidad del acusado, pena que podría ser la privativa de libertad si se excede los límites a donde llega el Derecho en cuanto al uso no controlado de violencia, es decir, se da para aquellos casos en donde las lesiones ocasionadas por el sujeto activo tengan una mayor cuantía en recuperación a comparación del valor del bien sustraído ( Gonzales, 2016, p.5).

El acto violento que se ejercerá sobre las personas durante la comisión del hecho delictuoso (el Robo), mismo hecho que puede generar laceraciones por el grado de fuerza que el delincuente emplea para hacerse del bien, pero para configurar el agravante de Robo con Lesiones, mediante un previo estudio se debe determinar si el hecho sucedido es netamente en base a un robo y no en base a una supuesta actitud violenta o como comúnmente se le conoce, “ajuste de cuentas”. No obstante, según la norma definimos a la lesión como aquel perjuicio que se le causa a la anatomía humana o en la salud que provoque cualquier tipo de déficit que no le permita al sujeto pasivo desarrollar sus actividades motoras en cualquier tipo de ambiente, como por ejemplo cuando un sujeto le corta la cara a otro, cuando esto sucede es muy difícil que en algún trabajo quieran contratar a personas con un mal aspecto o que no se puedan sentir cómodos con el trato (Gonzales, 2016, p.5).

#### 3.1.6.2. ROBO AGRAVADO

Señala que si la condena es elevada, deberá ser justificada ya sea por grado de peligrosidad, el uso de la fuerza o tipo de amordazamiento con la que se perpetua el delito ya que, el delito de Hurto no configura ninguno de estos agravantes.



De tal manera, se categoriza al delito de Robo de 2 variantes poco similares, la primera es hacer uso de la fuerza sobre el bien que es básicamente el empleo de la violencia sobre un objeto que impida concretar el hecho delictuoso, se han visto casos en donde puntualiza al robo como aquel hecho en donde, a pesar de no amordazar a la persona, se le diferencia del hurto por el daño como por ejemplo, hacer uso de una “pata de cabra” para lograr romper la bisagra de una puerta y de tal manera, adentrarse para despojar al sujeto pasivo de todos los bienes con los que se pueda hacer. Y la segunda, refiriéndonos al robo con violencia o intimidación a la persona, tiene como fin concretar el hecho delictuoso haciendo uso mediante de la vehemencia o amedrentamiento sobre el o los sujetos pasivos que ponen resistencia ante la acción de despojo que se configura en contra de ellos (Gonzales, 2016, p.8).

Tomando en cuenta estas dos variantes podemos deducir que el delito de Robo es fundamentalmente la adquisición ilegal de un bien mueble, ya sea un hecho consumado o simplemente se haya quedado en la intencionalidad de consumir el hecho a través de, el ardid para conseguir romper o vulnerar lo que le impide usando la violencia para hacerse de los bienes.

#### 3.1.6.2. ROBO CONTENIDO EN DESPOBLADO Y EN BANDA

Esta agravante se configura cuando el o los sujetos activos del hecho delictivo utilizan el contexto (en este caso despoblado quiere decir que no se note la presencia de ninguna persona transitando por el lugar donde ocurren los hechos), para aplicar sus técnicas ilegítimas además de que se debe tener en cuenta la participación no solo de un sujeto activo si no que se puede dar el caso en donde se actúe en banda (definiendo banda como grupo de 2 o más personas).

#### 3.1.6.2. EL DESPOBLADO

Esta agravante se configura cuando el sujeto activo tiene en mente, inducir al sujeto pasivo al error llevándolo así a un contexto en donde fácilmente se podría diferenciar de que si pueden o no pedir auxilio en caso de extremas agresiones, como por ejemplo lo que comúnmente se ve, personas extranjeras que son conducidas hacia sitios lejanos como pampas o campos. Entonces, para

resumirlo, el despoblado vendría a ser aquel espacio que en su mayoría es escasamente poblado además de estar ciertamente distantes a las demás viviendas para que de tal manera el sujeto activo pueda realizar o cometer el acto delictivo sin que las autoridades judiciales competentes tomen conocimiento de los hechos y así quedar impune ( Gonzales, 2016, p.10).

#### 3.1.6.3. ROBO CON PERFORACION O FRACTURA

Se tipifica como robo con perforación o fractura en el caso de que:

- a. A través de sus habilidades, logre escalar, hacerle un hoyo a la pared o adentrarse al inmueble por cualquier oleoducto que tenga el lugar.
- b. Cuando se quiebra parcialmente una parte de la casa ya sea, una puerta, luna u objeto que sirva como cerradura.

#### ROBO AGRAVADO CON USO DE ARMAS

Dentro de esta configuración del delito, encontramos que:

- a. El sujeto activo usa el arma de fuego en contra del sujeto pasivo
- b. Se usa el arma de fuego para demostrar su soberanía ofensiva para reducir la defensa de la víctima
- c. El arma forma en la víctima un sentimiento de peligrosidad real que es la intención de quien se muestra ofensivo utilizando conductas desviadas.
- d. Se pueden utilizar diferente tipo de armas (armas propias, armas blancas o armas impropias), el detalle es que de acuerdo al tipo de arma que se utilice para perpetrar el ilícito se tendrá en cuenta la valoración de la prueba para emitir una sentencia regida al principio de imparcialidad.

#### 3.1.6.4. TIPO OBJETIVO

El corazón del delito de Robo es el ilegítimo empoderamiento de un bien, que se logra a través del uso de la violencia sobre la cosas o con el uso de la fuerza, la astucia y el ardid empleada sobre las cosas para cometer el delito. Pese a que

han habido muchas teorías de que el Robo se ha podido configurar como un Hurto Agravado debido a que ambos tienen características similares ya que se basan netamente en el despojo de la posición de la víctima, debemos tomar en cuenta que para el Robo Agravado se puede captar un mayor grado de criminalidad que con la que se emplea el hurto por lo que demanda mayor apoyo pericial o el mejor empeño por parte del cuerpo policial (Gonzales, 2016, p.12).

#### 3.1.6.5. TIPO SUBJETIVO

Cuando hablamos del delito de Robo nos referimos a que es netamente doloso, o sea que se tiene la intención de cometer el delito, pero sin olvidar que dicha fuerza y violencia deben estar direccionadas hacia el apoderamiento ilegítimo del sujeto activo y el perjuicio que le ocasiona al sujeto pasivo, y aun luego de cometido el delito, la conducta desviada del sujeto activo lo llevará a actuar vandálicamente otra vez (Gonzales, 2016, p.12).

#### EL ART 189º DEL CODIGO PENAL

Señala que, la pena no será mayor a 10 ni menor a 20 años, si es que el hecho delictivo ha sido puesto en acción:

- En casa habitada
- Durante la noche
- Utilizando armas
- Actuación en banda
- Utilizando métodos de transporte (carro, moto, bicicleta, etc).
- Fingiendo ser funcionario público
- Cuando las consecuencias recaen sobre menores de edad o ancianos

#### 3.1.6.7. AGRAVANTES

La pena no será menor a 20 ni mayor a 25, si el hecho delictivo ha sido efectuado:

- Cuando se evidencien lesiones en la parte agraviada
- Si en caso el sujeto activo abusa de la incapacidad de la víctima.
- Colocando a la familia o al sujeto pasivo en una difícil situación económica

- Sobre todo aquel bien que se encuentre en protección por el Estado.

#### 3.1.6.8. DE LA PENA IMPUESTA

La pena de Cadena Perpetua se sentencia en casos de que el sujeto activo del delito, así haya sido solo o en conjunto, le generen déficits tanto en la salud como en la mente o en el extremo caso de que le propicie la muerte al sujeto pasivo.

A forma de análisis se señala que el robo es una figura que de por sí demuestra rasgos de peligrosidad en el autor de la comisión de dicho delito, justificado esta afirmación en que demuestra no tener reparo en vencer la resistencia o vulnerabilidad de la víctima, con la finalidad de poder apoderarse del bien, para lo cual hace uso de actos violentos o graves amenazas, con una clara diferencia ya antes mencionada del hurto en el robo propiamente en la modalidad de agravado es de valor irrelevante para la controversia el monto del bien sustraído, solo se considera suficiente la existencia de una actividad o acción que denote atentar contra la libertad, la vida el cuerpo y la salud de la persona agraviada, en ese sentido se puede determinar que no solo constituye en sí afectación del patrimonio personal si no que como viene planteándose en el ámbito del derecho se ve claramente que la afectación es con pluralidad de bienes protegidos por la ley, el robo es considerado como un delito constituido en su esencia por dolo de parte del agente activo del delito, ya que el mismo realiza el acto con conciencia y teniendo como voluntad desprender a la víctima de sus bienes aplicando mecanismos de violencia física o psicológica a través de amenazas que ponen en peligro inmediato su integridad física (Rojas, 2000, p.348).

Otro de los puntos comparativos del delito de robo agravado frente al hurto es que en el primero existe una marcada pluriofensividad ya que hay múltiples agresiones a interés de la persona, dentro de la configuración de este delito la normativa expresa a prevenido agravantes circunstanciales los cuales denotan mayor peligrosidad de acuerdo a los modos empleados para la comisión, de tal manera se determina que existe un mayor grado de intimidación cuando dicho delito es cometido aprovechando la oscuridad de la noche cuando los autores son 2 o más personas, estos agravantes son considerados como tal en vista de que

incrementan el poder ofensivo de la agresión y potencian la vulnerabilidad de la víctima elevando el peligro inminente sobre su vida o salud (Rojas, 2000, p.348).

### 3.1.3. TESTIS UNUS TESTIS NULLUS – UN TESTIGO NO ES TESTIGO

Para el desarrollo de este término se identifica que el testimonio es en sí un actuar dentro del proceso penal donde aquella persona declarante manifiesta ante el juzgador su versión de los hechos referidos al punto de controversia.

Esta preposición se interpreta como el rechazo a poder valorar el testimonio incriminatorio de una persona como suficiente para declarar una sentencia condenatoria contra un procesado, esta teoría es antigua, proveniente inicialmente de la tradición judío-cristiana en la cual se establece que era necesaria la acusación de más de 2 personas para poder tomar en cuenta las mismas como prueba que genere certeza al juzgador para tomar una decisión fundamentada correctamente, buscando esencialmente proteger al procesado de condenas injustas, basándose en tener muchos indicios ofrecidos por varias personas sobre la verdad jurídica o la responsabilidad que se le atribuye a una persona por la comisión de un ilícito, de tal manera se tiene mayor grado de certeza (Sancinetti, 2014, p.8).

Con la dichosa evolución del derecho procesal penal se busca darle otro sentido a este principio, como es uno de los fundamentos en los que se basan las primeras normas del derecho procesal penal, no se desea dejar de lado y por eso ajustándolo a la realidad moderna y las necesidades presentes actualmente, ya no es posible tomar la premisa que con la existencia de un solo testigo el testimonio del mismo sería considerado como nulo, por lo que se adecua restituyéndose y dejando solo a aplicación en la actualidad el carácter que junto con la declaración de una sola parte debe ir acompañándolo indicios u otros medios que incrementen el grado de verosimilitud y credibilidad (Sancinetti, 2014, p.10).

Dentro de los diferentes métodos utilizados para las pruebas legales, se podría establecer la exigibilidad de varios testigos que brinden sus declaraciones sobre un hecho ilícito cometido, al hablar de varias o pluralidad se consideran más de 2

personas que brinden testimonio, esto se debería a que antes existían más normas que restringían el derecho procesal penal, donde se tenían como requisitos obligatorios o formas para la presentación y evaluación de las pruebas (Sancinetti, 2014, p.10).

En la actualidad con la aplicación del acuerdo plenario 2-2005, ya no se considera que el testimonio de una sola persona no tenga validez para inculpar a una persona, produciendo así el archivamiento de los expedientes cuyo medio probatorio fundamental era sólo la declaración de un testigo o del propio agraviado, por lo contrario ahora si se tiene en cuenta y podría configurar un carácter de validez para desvirtuar la presunción de inocencia siempre que como lo señala el pleno y el análisis de otros juristas se deben cumplir requisitos así tener mayor grado de certeza o credibilidad para la decisión final del juzgador.

#### 3.1.4. DELITO DE ROBO Y ROBO AGRAVADO

Para determinar en qué consiste el delito de robo agravado, primero es importante desarrollar como se configuran los delitos para lo cual:

se menciona según los juristas, que para que sea considerado un acto delictivo este tiene que estar normado por la legislación según la jurisdicción correspondiente, además de ello también tiene que darse todos los elementos recogidos por la norma, esto quiere decir que sea comprobable la actuación delictiva del agente activo de lo contrario no podría decirse que existe una infracción penal, basándose así en la acción u omisión de la persona, en el caso del delito de robo agravado, se ve afectado un bien mueble, yendo en contra del patrimonio personal, dentro de las investigaciones realizada se tienen en cuenta los grandes índices que presentan las estadísticas en cuanto a la existencia de robos agravados en el Perú, a pesar de los intentos fallidos de las diferentes autoridades por atacar este delito que se convierte cada día más en un problema social, que afecta a la seguridad de los ciudadanos y a sus bienes

En lo que es el delito de Robo podemos encontrar afines con el delito de Hurto como por ejemplo así como dentro del robo el bien que se protege es la posesión, dentro de hurto también es la posesión ya que, el objeto tomado como la materia

fundamental es el bien mueble además de solicitarse forzosamente la certificación que se encuentre la presencia de sacarle provecho al bien extraído. No obstante, en lo que viene a ser el hecho delictivo encontramos puntos semejantes, la palabra correcta con la que el legislador define Robo no es esencialmente tan diferenciado de como definimos a hurto porque en ambos encontramos el ardid de apoderarse haciendo uso de sus habilidades. La que marca una diferencia entre hurto y robo es, el modo en cómo se configura el delito para apoderarse parcial o totalmente del bien porque el Hurto, para apoderarse del bien mueble, no precisamente recurre al uso de la violencia, intimidación o fuerza sobre las personas (Muñoz, 2015, p. 341).

Uno de los autores más destacados en las investigaciones dentro del ámbito jurídico señala que se puede reconocer al robo como un delito que se configura por el verbo rector apropiación de un bien mueble sin tener la legitimidad para poseerlo, con el objeto de recibir un provecho patrimonial, dicha apropiación es realizada bajo mecanismos de violencia y agresión, como en si el delito puede tener varios agravantes ya sea por las circunstancias en las que se desarrolla la actividad delictiva como por la forma en que se emplea la violencia para la sustracción de los objetos materia de robo ( Salinas, 2015, p. 138).

El Derecho Romano define al robo como rapiña (hecho u acción de despojar a una persona de un bien jurídico que está protegido, en este tipo de delito vendría a ser la propiedad del bien) diferenciándolo, al ya mencionado delito, de un despojamiento clandestino o mejor conocido como Hurto, esta definición también fue tomada por los germanos, hoy en día los germanos continúan usando esta diferenciación entre hurto y robo ya que ambos poseen diferentes características, características que están plasmadas dentro del art 188 mismo artículo que señala que cualquier persona puede incurrir en un delito y tiene como fin prever un hecho punible general a comparación del llamado delito especial, o sea estamos hablando de un instrumento penal que se encarga de prohibir la acción de robar, buscando regular las conductas desviadas que llevan al sujeto a cometer este delito agravando el hecho, haciendo uso de la violencia contra el bien o contra el sujeto pasivo de la acción y por último, al considerarse al robo como un delito instantáneo en donde el sujeto activo se apodera ilegítimamente del bien se le

atribuye un desvalor típico frente a otros casos de mayor complejidad ( Gonzales, 2016, p.3).

### 3.1.5. LAS CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DEL DELITO

Se determina que la tipicidad es la acreditación de la conducta delictuosa del acusado, conforme se fundamente de acuerdo a los considerandos precedentes y estos a su vez tiene que amoldarse y adecuarse cumpliendo el tipo básico de robo establecido en el artículo 188 del código penal, así mismo también las circunstancias enmarcadas en el artículo 189 del código penal en los incisos 2 y 4 referido al robo agravado, en los cuales señala como agravante cuando el hecho se comete durante la noche y con la participación de 2 o más sujetos en la actividad delictiva, logrando de tal manera reducir a la víctima dejándola en un estado de indefensión.

Respecto a la antijuridicidad se dice que al probarse la acción típica del acusado contra el ordenamiento jurídico y en tanto no exista ninguna circunstancia que nos permita inferir que probablemente podría encontrarse incluso en alguna de las causas que los eximen de la responsabilidad penal como por ejemplo alguna enfermedad psiquiátrica entre otros y mucho menos justificantes de responsabilidad reconocidos y recogidos por el código penal siendo de todos modos evidente su intención de procurarse de un provecho económico ilícito con la apropiación de algún bien mueble.

y por ultimo desarrollando el tercer elemento dentro del delito hablamos de culpabilidad que se determina en la última fase del proceso penal a seguir contra el imputado, en esencia es la declaración de una persona al haber encontrado pruebas suficientes que acrediten su responsabilidad en la comisión de un delito en este caso de robo agravado, demostrando a través de lo actuado en las audiencias y diferentes etapas del proceso la culpabilidad del sujeto activo del delito, si este elemento no llega a acreditarse debidamente y sustentarse con los medios probatorios correspondientes no se podría configurar el delito como tal, por otro lado el imputado puede ser reconocido como autor del delito y por lo tanto declarado culpable pero si no tiene la determinada capacidad personal esto puede quedar sin sanción.



## **CAPÍTULO II**

### **CASO PRÁCTICO**

#### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

##### **2.1. Planteamiento del Caso**

Se le sindicó al acusado Kevin Joseph Molina Vásquez, haberse apoderado de las pertenencias del agraviado Aníbal Efraín Torres Alberto, hecho que habría realizado conjuntamente con dos sujetos no identificados, en horas de la madrugada aproximadamente a las 05:00 am del 05 de enero del 2014, en la avenida 27 de diciembre de la zona de San Francisco de Tablada de Lurín, distrito de Villa María del Triunfo, siendo el caso que, cuando el agraviado se encontraba caminando por el grifo “Regalón”, lo interceptaron 3 sujetos, el acusado lo distrajo pidiéndole 1 sol, uno de los sujetos no reconocidos lo cogió del cuello y lo tumbó al piso, seguidamente el acusado y los dos sujetos lo agredieron y lo despojaron de la suma de doscientos sesenta nuevos soles, así como 2 teléfonos celulares uno marca Samsung y el otro Nokia, un USB marca Samsung, dándose luego a la fuga, después fue intervenido y reconocido por el agraviado.

##### **PRUEBAS EFECTUADAS**

- a. Declaración instructiva del acusado Kevin Joseph Molina Vasquez, quien reitera ser inocente de los cargos que se le imputan, señalando que el día de los hechos se encontraba con sus amigos bebiendo alcohol frente al grifo “Regalón”, circunstancias que vio al agraviado ser intervenido por 3 sujetos que lo despojaron de sus pertenencias y lo golpearon, pero el declarante y sus amigos no se metieron, seguidamente el agraviado se levantó y se fue, y cuando se dirigía a comprar bebidas alcohólicas con el dinero de sus amigos apareció un patrullero y fue intervenido.
- b. Manifestación policial del agraviado Aníbal Efraín Torres Alberto que sindicó claramente al acusado como partícipe del evento delictivo, a nivel judicial no brinda declaración preventiva y en juicio oral cambia su versión

excluyendo al acusado de la comisión del delito, pero se ratifica de su firma en el acta de reconocimiento, resultando contradictorias sus declaraciones, a lo que se exculpa aludiendo que se encontraba inconsciente al momento de brindar su manifestación policial.

- c. Declaración del efectivo policial Alonso Pérez Izarra, quien suscribe el atestado policial, dejó constancia que las investigaciones policiales se llevaron conforme a las garantías legales, las manifestaciones y el acta de reconocimiento se dieron en presencia del fiscal, precisando que el agraviado brindó manifestación de manera consciente, espontánea y libre.
- d. Declaración del efectivo policial Max Menéndez Saldaña se ratifica en el parte policial obrado donde se consigna que el agraviado reconoció a dos sujetos que participaron del robo, uno de ellos Kevin Joseph Molina Vasquez, se especifica las especies que habrían sido doscientos sesenta soles, 2 celulares marca Nokia y Samsung.
- e. Certificado médico realizado por la médico legista Ruth Santa Cruz Huallpa, que declara que el agraviado Aníbal Efraín Torres Alberto presentaba lesiones traumáticas recientes localizadas en la cabeza, rostro y miembros superiores ocasionados por agente contundente duro.

#### ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

El representante del ministerio público sostuvo que se encuentra acreditado todos los puntos del dictamen acusatorio, debido a que:

- Los hechos imputados son corroborados con la declaración preliminar del agraviado y el acta de reconocimiento donde se sindicó al acusado.
- El certificado médico legal y la ratificación del mismo que concluyen que el agraviado sí presentaba lesiones con resultado de la violencia ejercida sobre él.
- Declaración testimonial de Piero Alexander Martínez Fernández quien se encontraba con el procesado el día de los hechos y pudo advertir la conducta de éste.

#### ALEGATOS DE LA DEFENSA TÉCNICA

La defensa técnica solicita la absolución de la acusación fiscal aludiendo que:

- El agraviado no ha acreditado la preexistencia de las especies sustraídas, por lo que no se puede comprobar la existencia de los 2 celulares, el USB y la cantidad de dinero que supuestamente fueron robados.
- Hay variación en las declaraciones del agraviado durante el proceso y no hay persistencia en la incriminación contra el acusado.

## **2.2. Síntesis del caso**

Delimitación del pronunciamiento del tribunal

Corresponde al tribunal establecer si existen pruebas validas de cargo que determinen la comisión del evento delictivo, quiere decir si el agraviado Aníbal Efraín Torres Alberto fue víctima del robo de sus pertenencias, así como la responsabilidad penal del acusado Kevin Joseph Molina Vasquez como uno de los autores de dicho evento delictivo.

De la noticia criminal y la intervención del acusado

Elaborada por el agente policial Max Menéndez Saldaña, donde se informa que a solicitud del agraviado, quien denunció haber sido víctima de robo, procedió a realizar el patrullaje por el lugar de los hechos, ubicando a dos sujetos, entre ellos al acusado Kevin Joseph Molina Vasquez, a quien el agraviado reconoció como uno de los sujetos que le robo violentamente la suma de 260 soles, dos teléfonos celulares y un USB.

De la materialidad del delito y la responsabilidad penal del acusado

De lo actuado durante el presente proceso, se acopian los testimonios del agraviado prestados ante el representante del Ministerio Público y el efectivo policial que participó en la intervención del acusado, teniendo en cuenta que su intervención fue en cuasi flagrancia, minutos después de la perpetración del evento delictivo, se presentan los medios de prueba antes mencionados.

De la retractación del agraviado

En el desarrollo del presente proceso existen diferentes versiones y contradicciones del agraviado ya que:

Ante la presencia de un representante del ministerio público, el agraviado sindicó de manera libre, clara y espontánea al acusado como uno de los autores del robo agravado del que fue víctima, reiterando de forma coherente y firme lo dicho durante la diligencia de reconocimiento, sin embargo al concurrir a la sesión de juicio oral, el agraviado refirió que el acusado no fue quien le robo, rectificando su versión aludiendo que se encontraba inconsciente durante dicha diligencia.

Ante la retractación del agraviado, es de aplicación en el presente caso lo establecido en el recurso de nulidad N° 3044- 201, en el que se determinó que frente a 2 o más declaraciones carentes de uniformidad sobre los hechos incriminados, prevalece como confiable aquella declaración con contenido de inculpación, pues es frecuente en casos similares. cuando el delito ha sido cometido ejerciendo violencia física sobre el sujeto pasivo, haya mediado posteriormente amenazas o algún tipo de presión sobre la víctima para intimidarlo, consecuentemente a fin de evitar represalias la víctima varía su primigenia versión.

#### Descargos del acusado y su defensa técnica

Respecto a las declaraciones y defensas empleadas por el acusado se evidencian contradicciones, incoherencias y faltas de uniformidad en las declaraciones prestadas en las diversas etapas procesales, ya que el acusado en la manifestación policial prestada ante un representante del ministerio público, dijo que el día de los hechos estaba con su enamorada y con un amigo ingiriendo licor, durante la instrucción dijo que estaba con cuatro amigos 2 hombres y 2 mujeres, asimismo a nivel policial dijo que a su lado pasaron 3 sujetos y asaltaron al agraviado, luego estos se repartieron el dinero, en sus posteriores declaraciones dijo que después de robar al agraviado vio que se retiraron, la defensa técnica pide se absuelva al acusado sosteniendo que no hay pruebas en lo actuado que lo incriminen, solo existe la declaración del agraviado que lo sindicó como autor, también señala que no se acredita la pre existencia por ley.

## FALLO DE LA SENTENCIA

CONDENANDO a KEVIN JOSEPH MOLINA VASQUEZ (reo en cárcel), como autor del delito contra el patrimonio modalidad de robo agravado en agravio de Aníbal Efraín Torres Alberto, y como tal le

IMPUSIERON SIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, computada desde el día de hoy vence el veinticuatro de setiembre del año dos mil veinticuatro;

FIJARON monto de UN MIL SOLES como concepto de REPARACION CIVIL, pagado por el sentenciado a favor del agraviado;

ORDENARON se oficie al Instituto Nacional Penitenciario para el cumplimiento de la presente sentencia;

MANDARON se emitan los boletines y testimonios de condena, se inscriban en registro judicial respectivo conforme a ley, archivándose definitivamente los actuados con consentimiento del juez de la causa.

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

RECURSO DE NULIDAD CONTRA SENTENCIA EXPEDIDA

AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECORRENTE

No se valoró adecuadamente el acta de reconocimiento, ni acta de registro personal, en el cual señala que no se le encontró en su poder ningún bien sustraído al agraviado.

El agraviado no brindó declaración preventiva ni acreditó la preexistencia de los bienes robados.

Contradicción de la manifestación policial y declaración en el juicio oral del agraviado.

## EXAMEN JURISDICCIONAL DE AGRAVIOS

De los hechos materia de juzgamiento, antes mencionados se analiza y menciona:

Conforme al acuerdo plenario dos-dos mil cinco/ CJ116 del 30 de septiembre del 2005, se entiende que la declaración de un agraviado tiene entidad para considerarse prueba válida, por ende enerva la presunción de inocencia del imputado. Pero no debe advertirse razones objetivas que invalide sus afirmaciones cumpliendo las garantías de certeza, que son la verosimilitud que es coherencia y solides de la declaración y corroboraciones periféricas objetiva que la doten de aptitud probatoria y la persistencia en la incriminación, es una regla que le permite al juzgador optar por considerar las declaraciones adecuadas, por lo cual no se inhabilita el cambio de versión para su apreciación judicial.

Para el análisis de la sentencia impugnada que si bien el agraviado sindicó al encausado a nivel preliminar, esta incriminación no supera la certeza de verosimilitud, por lo que se presenta razón objetiva para neutralizar la enervación de la presunción de inocencia del procesado sobre aquella sindicación, a partir de este se fundamenta la decisión condenatoria basándose en la denuncia policial, la intervención en cuasi flagrancia del acusado, la sindicación del agraviado a nivel preliminar, declaración en juicio oral de los efectivos policiales y la acreditación de las lesiones corporales.

Por lo que no se advierte que la sindicación del agraviado haya sido tomada en cuenta de acuerdo al acuerdo plenario en cuanto a la verosimilitud de la incriminación preliminar, se señala que el relato sindicador carece de uniformidad solides y coherencia, en tanto que si bien declaró que fue el señor molina quien se le acercó el día, lugar y hora señalado a pedirle un sol y justo en ese instante se aparecen los demás sujetos y refiere que todos salieron de un grupo de personas que estaban bebiendo alcohol, también indica que no puede reconocer con precisión los rasgos físicos de las personas que conformaban el grupo y que como resultado de la agresión como manera de defensa se cubrió el rostro perdiendo así la posibilidad de divisar a sus victimarios.

Así mismo en la diligencia de reconocimiento, previo a la identificación del acusado, el agraviado describe físicamente a la persona que le pidió un sol, como un hombre de tez trigueña, contextura regular, cabello corto, estatura baja, cara ovalada y de 20 años de edad aproximadamente, evidenciando falta de coherencia sustancial en la identificación del acusado, generando dudas sobre la genuinidad del reconocimiento ya que podría considerarse como vicio de la voluntad la condición del agraviado al describir los hechos.

La sindicación del agraviado tampoco cuenta con corroboraciones periféricas suficientes que tengan carácter probatorio para desvirtuar la presunción de inocencia, pese a que su intervención se produjo en instantes posteriores al hecho, no se halló ningún elemento que lo vincule con el delito en el registro personal, el encausado Molina Vásquez negó uniformemente los cargos durante todo el proceso, en su declaración manifiesta que fue testigo presencial junto con sus amigos del robo del que fue víctima el agraviado.

El acta de reconocimiento carece de la idoneidad necesaria para construir un medio probatorio acreditativa, si bien es cierto por otro lado que el certificado médico acredita las lesiones contusas que el agraviado presenta, esto no acredita la implicancia del encausado en el hecho delictivo y más aún cuando el agraviado no especifica cómo fue que supuestamente el encausado lo agredió en el momento del robo.

Además en la declaración de juicio oral brindada por el agraviado señaló que el encausado no fue la persona que se le acercó y le pidió dinero e indicó que Molina Vásquez debía saber quiénes le robaron, por dicha retractación los actuados son consonantes con la falta de uniformidad solidez o coherencia.

Se determina la existencia de insuficiencia probatoria respecto a la responsabilidad penal del encausado y consecuentemente no se desvirtúa su presunción de inocencia, por lo cual corresponde absolverlo de la acusación fiscal.

## DECISION

DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia expedida, que condenó a Kevin Joseph Molina Vásquez como autor del Delito Contra el Patrimonio modalidad de robo agravado en perjuicio de Aníbal Efraín Torres Alberto, REFORMANDOLA, la revocaron y ABSOLVIERON al referido encausado de la acusación fiscal formulada en su contra por el mencionado delito;

DISPUSIERON la anulación de los antecedentes penales, policiales o judiciales que le hubieran generado a Kevin Joseph Molina Vásquez en la presente causa

ORDENARON la inmediata libertad de Kevin Joseph Molina Vasquez, siempre y cuando no se encuentre vigente mandato de detención en su contra para lo cual debe oficiarse a la sala superior.

MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria al tribunal de origen hágase saber.

### **2.3. Análisis y opinión crítico del caso**

Para fines de la investigación, he tenido a bien analizar la presente sentencia, en vista que se adecua formalmente al tema de investigación, siendo este que si la valoración o calificación de la declaración del agraviado en el delito de Robo Agravado constituye prueba suficiente para que el imputado sea condenado culpable, analizando el presente podemos observar que si bien es cierto que las circunstancias de un caso pueden ser similares más no idénticas a otros casos, de acuerdo a la sentencia final el investigador está conforme con la aplicación del acuerdo plenario 02- 2005 CJ/-116 en vista de declarar inocente al procesado por los cargos de Robo Agravado, consecuentemente con que la declaración presentado por el agraviado no guardaba coherencia y no generaba la certeza suficiente para que el imputado sea declarado culpable, respetando de tal manera el principio in dubio pro reo y presunción de inocencia, al existir una duda razonable de parte del juzgador por haber declaraciones contrarias, este acuerdo plenario no sólo puede ser usado para establecer la inocencia de un procesado por incongruencias en las declaraciones de las víctimas, sino que también puede



usarse en contrario, esto quiere decir que teniendo en cuenta su rango de aplicación también puede servir para inculpar a un procesado por la comisión del delito siempre que la declaración prestada cumpla los requisitos de verosimilitud.

## **CAPITULO III**

### **ANALISIS JURISPRUDENCIAL**

#### **3.1 Jurisprudencia Nacional**

Dentro de la investigación realizada uno de los puntos a tratar relevantes es la implementación del pleno jurisdiccional en sala penal N° 2-2005/ CJ-116, el cual describe lo siguiente:

##### **3.1.1. Fundamentos jurídicos**

para establecer con exactitud se hablan de 2 normas dentro del ámbito probatorio en el proceso penal, que sirve para tener en cuenta los criterios o fundamentos en cuanto a la valoración de las pruebas y eso la Constitución Política del Perú que en uno de sus artículos señala a la presunción de inocencia y la otra norma a tener en cuenta es el código de procedimientos penales en su artículo referido a la apreciación que el juez le da a los hechos y medios probatorios que ante él se ofrezcan incidiendo en que dicha valoración debe verse relacionada con su criterio de conciencia, la aplicación de estas dos normas deben estar sujetas a que no existan dudas o incertidumbres al momento de establecer el fallo o sentencia, se determina que aunque la ley le dé al juez o a la sala sentenciadora un poder de apreciación sobre las pruebas no se puede condenar a una persona si no hay pruebas que demuestren su culpabilidad, de la misma manera las pruebas ofrecidas serán practicadas teniendo en cuenta las garantías exigibles por ley, estas se llevaran a cabo teniendo presente la lógica, la experiencia y la sana crítica.

Hablando sustancialmente de la apreciación que le da el juez a los medios probatorios presentados dichos criterios están recogidos por el código de procedimientos penales, donde se le otorga al juzgador la capacidad de valorar cada prueba sin limitaciones legales que lo sujeten, en relación con el derecho a la presunción de inocencia, se toman en cuenta que las pruebas que se presenten de parte del acusador, deben justificar un fallo condenatorio con suficiencia, para lo cual el mecanismo para determinar el grado de suficiencias es que esta puede sustentar la imputación que se le hace al imputado con idoneidad, así como la

valoración de los coimputados y los agraviados en casos específicos, en los cuales el juez podrá hacer uso de su criterio de lógica, sobre esto es relevante referir que los involucrados ya antes mencionados guardan relación directa con el hecho imputable es decir sobre el objeto a tratar dentro del proceso y que de tal manera sería importante valorar dichas declaraciones y tenerlas en cuenta para llegar al fallo correcto que absuelva o condene al imputado, para esto se deben seguir criterios de aplicación para la valoración que ayudan a cumplir con las garantías de un proceso penal constitucionalmente correcto, estos criterios ayudan a establecer la racionalidad de ponderación que los órganos jurisdiccionales pueden tomar en un caso en específico.

Al prestar su declaración un coimputado con relación a un hecho que involucra el accionar de otro coimputado, pero dichas declaraciones rendidas también lo involucren en si en vista de que el accionar delictivo se cometió de forma conjunta, se considera que no es asimilable las condiciones de ambos dentro el proceso, así pueda darse a entender que la declaración testimonial sirva para generar convicción jurídica, no podría haber una descalificación en el proceso, ya que determinado el caso es relevante valorar y apreciar las distintas circunstancias que van en relación con la credibilidad, en este sentido es apropiado para señalar si hay datos importantes que desvirtúen explicando así mismo las mentiras que pudiera brindar el imputado, por lo que se deben plantear cautelas que mencionan que aquel coimputado en un caso en concreto no está en la obligación legal de contar la realidad de los hechos ya que durante la etapa procesal correspondiente no se le toma juramento al coimputado declarante como testigo y sus declaraciones no son sancionables bajo ningún termino, es entonces que se dice que no hay amenaza en relación al falso testimonio y el incremento de pena.

Las circunstancias o los criterios usados que se tienen en cuenta para apreciar las declaraciones antes mencionadas son los siguientes:

Uno de los aspectos a tener en cuenta está involucrado directamente con la denotación subjetiva, esto haciendo referencia de la personalidad del coimputado, en tanto que la relación que este tenga con el otro coimputado será clave ya que

puede afectar el testimonio que manifieste en su declaración, continuando con la parte subjetiva también debe tenerse en consideración cuales serían las posibles motivaciones del testigo, dichas motivaciones no podría ser oscuras, conmovidas por odio, venganza, o por obtener un beneficio de algún tipo, sobre todo si esto guarda relación con un beneficio judicial, que pueden restarles importancia y credibilidad, es por esta razón que se deberá advertir la finalidad de dicha declaración testimonial y que en ningún caso la misma podrá considerarse un medio de exculpación de la responsabilidad que el testigo coimputado pueda tener del actuar ilícito.

En el sentido objetivo, se presenta el requisito direccionado a que la declaración que pueda incriminar al procesado, se encuentre acreditado y corroborado mediante la inclusión de otras declaraciones o indicios previos que se den a forma de aumentar la fuerza de la acusación contra el imputado para lo cual el conjunto de todos estos medios probatorios tienen que verse relacionados directamente con el procesado y su responsabilidad por el hecho ilícito atribuido al mismo, estos medios probatorios pueden corroborar el hecho, dar datos más exactos o circunstancias más precisas en torno al delito de forma externa, se habla de un carácter periférico, es decir descripciones acorde con la realidad que incriminen al imputado.

Por último uno de los criterios que también se debería considerar es el relato del coimputado en tanto este mantenga su coherencia y solidez, se reitera que no es una regla que no admita matizaciones, mantener sus afirmaciones en todas las etapas del proceso, de por si se afirma que el cambio de versiones que pueda tener el coimputado al momento de rendir sus declaraciones no es inhabilitarle para su valoración en lo judicial, siempre que dichas declaraciones en conjunto se hayan sometido a evaluación y análisis, de la misma forma el juez puede optar por tomar para su fundamento de sentencia las que considere según su criterio de conciencia y convicción las adecuadas.

Lo mencionado anteriormente es referido a las declaraciones expresadas por un coimputado dentro del proceso penal, a continuación de la misma manera se

exponen los criterios a tomar en cuenta cuando se habla o presenta la declaración del agraviado dirigido a la inculpación del procesado.

Tratando el tema específico de las declaraciones testimoniales del agraviado, así el mismo sea el único testigo de los hechos, y ya habiéndose descartado la teoría de que el testimonio de una sola persona no se consideraba valido para realizar la adecuada acusación, se determinará como un medio probatorio valido, que posee virtualidad procesal para desvirtuar o debilitar el principio de presunción de inocencia del procesado, mientras no se adviertan motivaciones objetivas que contradigan e invaliden los puntos expuestos en la declaración, para lo cual se tendrán que garantizar la verosimilitud:

Que no se pueda comprobar la existencia de una relación fundamentada en la venganza, resentimiento o enemistad entre el imputado y el agraviado, esto con el fin de que no hayan indicios de parcialidad, en vista que dicha relación estaría colocando fuera de certeza y claridad este medio probatorio dentro del proceso, evidenciando una falta de credibilidad frente a las afirmaciones expuestas en la declaración del agraviado, en vista de que estas pueden ser utilizadas como medio de venganza o se presentaría con motivos turbios afectando el proceso.

Otro requisito para poder utilizar la declaración del agraviado como medio probatorio suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia es la verosimilitud en tanto que las declaraciones no solo tienen que mantenerse esa relación lógica entre los hechos y los involucrados en las circunstancias espacio tiempo y la solidez en la que se manifiesta la propia declaración sino que a su vez debe estar relacionada directamente con indicios que corroboren certeramente lo señalado en la declaración ante el órgano judicial, impulsando su aptitud probatoria ante el juzgador.

Por último otro criterio que debe estar presente al momento de iniciar la valoración de pruebas como la declaración del agraviado en sede judicial es la persistencia en cuanto a las afirmaciones determinadas a inculpar al procesado, esto quiere decir que las diversas declaraciones comprendidas y realizadas en las diferentes etapas del proceso incluso antes de iniciado el mismo deben mantenerse constante en la acusación principal esto no quiere decir que no puedan haber

algunas ligeras modificaciones y que actualmente no se considera con poder de desvirtuar la calificación merecida de parte del juez, siempre que el conjunto de las mismas se dirija hacia la misma idea principal.

Todo lo desarrollado anteriormente tiene que mantenerse y ser evaluado conforme lo establece la ley, es básicamente un asunto o materia especialmente devengada en la valoración de dichas declaraciones por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente para su pronunciamiento, son reglas flexibles que respetan la libre convicción del juez y la presunción de inocencia del imputado ya que de tal forma permite matizar lo referido a cada caso.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CASO**

### **Conclusiones**

1. Las normas y leyes que conforman el ordenamiento jurídico sirven como marco jurídico para que el juzgador aplique su libre convicción para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, utilizando para ello las reglas de la sana crítica, como regla de valoración de las pruebas que trae consigo el nuevo modelo procesal penal.
2. El juzgador emitirá una sentencia condenatoria en la medida que se acredite la responsabilidad del imputado, por lo que declarará culpable de los hechos que se le imputan si a si los medios probatorios han acreditado su responsabilidad más allá de toda duda razonable.
3. Es importante reconocer que nuestra legislación hace bien en reconocer derechos fundamentales de las personas sobre todo dentro del proceso penal en los que pueden estar inmersos, derechos propios de un estado democrático como lo son la presunción de inocencia que en generalidades es reconocer al procesado por la comisión de un delito, la calidad de inocencia hasta que se declare su culpabilidad.
4. En tal sentido en el caso materia de análisis, se ha demostrado que el juzgador no ha aplicado de manera correcta el Acuerdo Plenario dos-dos mil cinco/ CJ116 del 30 de septiembre del 2005 que contiene reglas de valoración tanto del agraviado como del testigo, lo que ha vulnerado el principio del indubio pro reo y presunción de inocencia.

## **Recomendaciones del caso**

1 Recomendamos que se realicen eventos académicos dirigido a los fiscales penales, jueces penales, abogados especialistas en derecho penal con la finalidad que se internalice los alcances del Acuerdo Plenario dos-dos mil cinco/ CJ116 del 30 de septiembre del 2005, de tal manera que dichos operadores jurídicos, internalicen el contenido del mismo para una mejor aplicación.



## REFERENCIAS

- Cafferata N. José y otros (2004). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Segunda edición. Córdoba, Argentina: Editorial Intellectus.
- Gomes F. Antonio (1995). *Presunción de inocencia y prisión preventiva*. Santiago, Chile: Editorial Jurídica Conosur.
- San Martín, C. César (2003). *Derecho Procesal Penal*, Volumen I, Segunda Edición. Lima, Perú: Grijley.
- Miranda E. Manuel (1997). *La mínima actividad probatoria en el proceso penal*. Barcelona, España: Bosch.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid N° 976-2012 de 19 de septiembre de 2012.
- Vizcarra, V. Paul (2016). *Precisiones al Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 Declaración de la víctima suficiente para enervar la presunción de inocencia*. Lima, Perú: Foro jurídico.
- Gonzales, M. Talía (2016). *Delito de Robo Agravado*. España, recuperado de: <https://es.calameo.com/read/002658347ec1c2698403d>
- Salinas S. Ramiro (2015). *Delitos contra el patrimonio*. Lima, Perú: Pacífico Editores SAC.
- Muñoz, C. Francisco (2015). *Derecho Penal, Parte Especial*. Valencia, España: Tirant lo Blanch.
- Higa, S. Cesar (s.f.). *El derecho a la Presunción de Inocencia desde un punto de vista constitucional*, recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/12793/13350>
- Vasquez, R. Jorge (2000). *Derecho procesal Penal*. Argentina: Rubenzul- culzoni Editores.

Gutiérrez, c. Eduardo (1974). *Estudio de derecho procesal penal*. Pamplona: Universidad de Navarra S.A.

Rojas, V. Fidel (2000). *Delitos contra el Patrimonio*. Lima, Perú: ed. Grijley

Herrera, V. Ricardo. *Apuntes preliminares para la aplicación del principio In dubio pro reo*. Lima: Derecho y Sociedad. Disponible en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/14231/14842>.

Sancinetti, A. Marcelo (2014). *Testimonio único y principio de la duda*. Buenos Aires, Argentina: Indret.

Nieva J. (2018) *La razón de ser de la presunción de inocencia*, Barcelona: InDret

### **Referencias Legales:**

Acuerdo plenario dos-dos mil cinco/ CJ116 del 30 de septiembre del 2005

Exp: N 56-2014

Nº 2915- 2004-PHC/TC